

**C.A. Santiago.**

Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

**VISTOS:**

Que el 9 de marzo de 2023 comparece don Ulises Marcelo Cerda Pecarevic, abogado, en representación de Blanco y Negro S.A., y conforme al artículo 26 de la Ley N° 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional, deduce reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N° 57 de 03 de febrero de 2023, notificada el 22 de febrero del mismo año, emanada de la Delegación Presidencial Regional de la Región Metropolitana y solicita se declare el decaimiento del procedimiento administrativo por el cual se sancionó a la reclamante al pago de una multa de 1.000 U.T.M.

Como contexto señala que los hechos objeto de sanción acaecieron el 25 de agosto de 2018, fueron denunciados el 13 de septiembre del mismo año y realizó los descargos la reclamante el 08 de enero del año siguiente. Agrega que la resolución respecto de la cual se recurre fue emitida el 03 de febrero de 2023 y notificada el 22 del mismo mes. Por lo anterior, alega que desde el inicio del procedimiento y hasta la dictación de la respectiva sentencia han transcurrido más de 4 años. En tal sentido, reclama que el plazo de duración del procedimiento administrativo ha superado el plazo de 6 meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no encontrándose justificado por caso fortuito o fuerza mayor, procediendo la aplicación de la institución del decaimiento del procedimiento administrativo, reconocido como una sanción a los órganos de la administración y citando al efecto la sentencia de la Corte Suprema Rol N°6812-2015.

Luego argumenta que se han infringido los principios que el artículo 27 de la Ley N°19.880 pretende tutelar, que serían los de impulso de oficio del procedimiento y celeridad, consagrados en el artículo 8 de la Ley N° 18.575 y el artículo 7 del primer cuerpo normativo citado en este párrafo; el principio de eficiencia y eficacia, consagrado en el artículo 3 de la Ley N° 18.575; y el principio de responsabilidad que recae sobre todos los órganos de la administración, el cual sería consecuencia de lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

En último término, indica, que también es atingente al caso la garantía de debido proceso, aplicable a los procedimientos sancionatorios, en tanto se



resguarda el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o dentro de plazo razonable, resguardado en el artículo 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su numeral 3, letra c) y en el artículo 8 N° 1 del Pacto de San José de Costa Rica.

Finaliza solicitando se declare la ilegalidad de la Resolución Exenta N°57 de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, dejándola sin efecto, en razón del decaimiento del procedimiento del acto administrativo.

El 31 de marzo de 2023 evacuó el traslado doña Ruth Israel López, procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago.

En primer lugar señala los hechos que motivaron la determinación de la sanción de multa a la reclamante, en orden a que el 13 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas, en partido de fútbol válido por la 12° fecha del Campeonato Nacional de Primera A, entre la reclamante y el club Universidad de Chile, se habría infringido por la primera la Ley N° 19.327, en razón de: 1) Falta de dispositivos de seguridad por el ingreso de elementos prohibidos -constatada por la activación de bengalas y pirotecnia-, hipótesis consagrada en el artículo 3 letra a) y artículo 7 del cuerpo normativo citado, además de lo dispuesto en los artículos 76 y 85 del Reglamento de la Ley N°19.327; 2) Falla en el funcionamiento de sistemas de cámaras de seguridad, conforme al artículo 5 letra g) de la misma Ley, en relación al mismo reglamento y misma Resolución Exenta; 3) Falla en dispositivo de seguridad por obstrucción de vías de evacuación, conforme a la letra c) artículo 3 de la Ley N° 19.327, en relación con el Reglamento de la Ley, en su artículo 42 letra i); 4) Falla en dispositivo de seguridad por vulneración de condiciones de ingreso y permanencia en zona de animación del recinto, lo cual infringió el artículo 3 letra c) de la Ley citada, y el artículo 66 del Reglamento, y todo esto en relación a la Resolución Exenta del día anterior del evento.

Afirma que no existe ilegalidad o vulneraciones en el actuar de la reclamada, la cual sustanció el procedimiento y sanción conforme a las leyes N°19.327 y N°19.880. En concreto, sostiene, que el solo transcurso del tiempo no dan cuenta de un cambio de las circunstancias que condujeron a la determinación de la sanción, y que las normas que se estimaron infringidas siguen vigentes. Además la alegación de decaimiento del acto administrativo es improcedente porque no existe vulneración de un precepto o requisito



legal durante la substanciación del procedimiento, que es justamente el objeto del recurso de ilegalidad.

Agrega que el decaimiento del acto administrativo presupone la desaparición de los presupuestos de hecho o de derecho que motivaron a la administración a emitirlo, lo cual no es sino una inexistencia sobreviniente. Adicionalmente, recuerda que los requisitos del decaimiento son: a) que exista un acto administrativo esencialmente terminal, pues lo que trata de resolver el decaimiento son los efectos que ocurren tras la dictación y; b) que concorra una circunstancia sobreviniente, que puede ser de tres tipos: (i) de carácter fáctico que afecta la existencia del supuesto de hecho que habilita para la dictación del acto; (ii) que afecte al objeto sobre el cual produce sus efectos el acto administrativo; (iii) de carácter jurídico, es decir, una alteración sobrevinida a la regulación de los efectos del acto, sea que la derogue o que lo modifique sustantivamente. Concluye que ninguno de ellos concurre en la especie, en especial lo relativo al supuesto de dilación excesiva, la cual debe ser esencial, lo cual significa que deja en indefensión al interesado, o que por lo menos le produce menoscabo.

Finalmente, señala que el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que sustentaría la reclamación, no establece un plazo de carácter fatal, y para la constatación de la infracción debe ser injustificado.

#### **CONSIDERANDO:**

**Primero:** Tal como lo indica su nombre, el reclamo de ilegalidad constituye un mecanismo de control de los actos de la Administración que se traduce en un instrumento destinado a promover la revisión de sus actuaciones con miras a verificar que las mismas se ajusten a la legalidad o que sean tributarias de la ley que está llamada a regirlas;

**Segundo:** El inciso segundo del artículo 26 de la Ley N° 19.327, que regula los derechos y deberes de los espectadores de fútbol profesional, dispone que *“...los afectados por las decisiones administrativas de la autoridad encargada de aprobar la realización del espectáculo de fútbol profesional podrán reclamar la ilegalidad de esa decisión a la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de los quince días corridos contados desde la notificación a que se refiere el artículo 46 de la ley N°19.880...”*;

**Tercero:** En el caso sub lite el cuestionamiento de ilegalidad se hace consistir en lo que se conoce jurisprudencialmente como el “decaimiento del



procedimiento administrativo” y se funda en la demora excesiva que se observa entre la denuncia y la resolución final, superándose con creces el plazo de seis meses que se contempla para los procedimientos administrativos y sin justificar -por parte de la autoridad- el caso fortuito o fuerza mayor, razones por las que persigue que la sanción sea dejada sin efecto a causa del decaimiento del proceso sancionador.

**Cuarto:** Que si bien el artículo 27 de la Ley N° 19880 postula que *“Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”*, lo cierto es que no establece una sanción para el caso que ello no ocurra y, por el contrario, se trata de plazos no fatales cuyo incumplimiento sólo genera la responsabilidad administrativa correspondiente. Pero además, cabe advertir que lo que se pretende con la referida norma es evitar que el procedimiento se perpetúe sin concluir con una decisión del asunto, cuestión que no ocurre en la especie, puesto que la decisión sancionatoria ha sido formalmente notificada, incluso impugnada.

No está demás señalar en este punto que existen remedios expresamente dispuestos por la legislación en comento para el caso de dilación en el pronunciamiento administrativo, tales como la caducidad del procedimiento, establecida en el artículo 43 y los efectos del silencio (negativo o positivo) que se encuentra tratado en los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo legal.

**Quinto:** De otro lado, la doctrina administrativista del “decaimiento”, como bien lo apunta la reclamada, se ha construido a partir de la pérdida de eficacia del acto administrativo, esto es, cuando ha sobrevenido alguna circunstancia que derive en una ilegitimidad jurídica, al modo de una pérdida de objeto, la alteración de los supuestos de fácticos o una modificación legal que incida en los efectos del acto.

En tal sentido, se ha dicho que *“La literatura clásica ha señalado que el acto administrativo decae cuando desaparecen los presupuestos de hecho y/o de derecho que movieron a la Administración a emitirlo o porque se hace inutilizable. En sus efectos, el decaimiento producirá una inexistencia sobreviniente, pero solo de los efectos del acto, pues éste, a lo menos desde el punto de vista formal, continuaría vigente, aunque estéril”* (Cordero Vega,



Luis; *El Decaimiento Del Procedimiento Administrativo Sancionador*, en Anuario de Derecho Público, Universidad Diego Portales, 2011, p. 245)

Lo concreto es que las razones que fundan el decaimiento son diversas del mero transcurso del tiempo y, por el contrario, la duración del procedimiento- en el caso específico- incorpora también el lapso para el ejercicio del derecho a defensa y otras garantías procesales que son compatibles con el principio de eficiencia.

**Sexto:** Conforme se viene señalando, no se puede sostener que en el caso las razones que se tuvieron a la vista al iniciar el proceso sancionatorio hayan perdido oportunidad o vigencia, por el contrario, la eficacia de la legislación relativa a la violencia en los estadios se juega en que las instituciones cumplan el rol fiscalizador y se sancionen las incumplimientos y conductas que se intentan reprimir.

En esas condiciones, cabe concluir que no es asimilable la situación del decaimiento al caso del procedimiento sancionatorio en cuestión, puesto que pese a que éste se ha extendido por un lapso considerable (con emergencia sanitaria de por medio), el remedio aplicable en estos casos no es el pretendido por la reclamante.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19327, **se rechaza** el reclamo de ilegalidad interpuesto por Blanco y Negro S.A en contra de la Resolución Exenta N°57 de 3 de febrero de 2023 emanada de la Delegación Presidencial Metropolitana de Santiago.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

Redacción a cargo de la ministra(s) señora Díaz Urtubia.

**Rol N° 153-2023. Contencioso administrativo.**

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la Ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Rafael Plaza Reveco. No firma el Abogado Integrante señor Plaza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.





CEROXJFETX

Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Omar Antonio Astudillo C. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

